

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio –segunda instancia-

Santiago de Cali, cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76001-33-33-013-2015-00364-01
EJECUTANTE:	DARIO HERNAN VALENCIA FIGUEROA pradoabogado23@hotmail.com
EJECUTADO:	EMCALI EICE ESP notificaciones@emcali.com.co
ASUNTO	REVOCA AUTO QUE NIEGA MANDAMIENTO DE PAGO POR HABER OPERADO EL FENOMENO JURIDICO DE LA CADUCIDAD

MAG PON: FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ

I. OBJETO DE LA DECISION

Se procederá a resolver el recurso apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto interlocutorio nro. 1062 del 29 de octubre de 2015, proferido por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali, a través del cual negó el mandamiento de pago solicitado, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

II. ANTECEDENTES

El señor Darío Hernán Valencia Figueroa, a través de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva contra EMCALI EICE ESP¹ y solicitó se libre mandamiento de pago por concepto de los valores reconocidos, liquidados y ordenados pagar a través del acto administrativo nro. 830-DTH-004168 del 13 de septiembre de 2006.

III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 1062 del 29 de octubre de 2015², el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali negó el mandamiento de pago solicitado, por considerar que frente a la demanda había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Explicó el *a quo* que el título ejecutivo – Acto administrativo nro. 830- DTH-004168 – fue expedido el 13 de septiembre de 2006, sin que se presentara recurso alguno frente a éste y que la demanda ejecutiva fue radicada el 16 de octubre de 2015, fuera del término de los 5 años establecido en el artículo 164 numeral 2 literal k)³.

¹ Folios 40-49.

² Folio 52.

³ “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

...

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

...

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida”.



IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

El apoderado judicial de la parte ejecutante en el recurso de apelación⁴ explicó que el Gobierno Nacional, por intermedio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante Resolución nro. 002536 del 3 de abril de 2000, modificada por la Resolución nro. 000141 del 23 de enero de 2003, ordenó la toma de posesión para administrar los negocios, bienes y haberes de EMCALI EICE ESP con fines liquidatorios. Que a través de Resolución nro. 000562 del 5 de marzo de 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicó los efectos derivados del acto de toma de posesión, entre los cuales se encontraba la prohibición de iniciar procesos ejecutivos en contra de EMCALI EICE ESP; restricción que solo desapareció con la expedición de la Resolución nro. SSPD-20131300018945 del 24 de junio de 2013, la cual levantó la aludida toma de posesión.

Conforme a lo anterior, sostuvo que solo a partir de la última fecha mencionada comenzó a correr el término de caducidad de la demanda.

V. CONSIDERACIONES:

- Problema jurídico:

El asunto que se discute se contrae a establecer si frente a la demanda ejecutiva de la referencia operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control incoado.

- Marco normativo y jurisprudencial

El proceso ejecutivo fue instituido por el legislador como una herramienta para hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título ejecutivo. El artículo 297 del CPACA estableció que constituyen título ejecutivo, entre otros, “Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa”.

No obstante, el mismo legislador dispuso un límite temporal para la utilización de dicho mecanismo: el fenómeno de la caducidad. Este consiste en una sanción que restringe el ejercicio del derecho sustancial al no interponerse dentro del término estipulado en la ley. Tal limitante se encuentra consagrada en el artículo 164, numeral 2, literal k) del CPACA, el cual dispone que “Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida”.

Si bien la norma no menciona expresamente que dicho término resulte aplicable cuando se pretenda el cumplimiento de una obligación contenida en un acto administrativo, esta Colegiatura considera que tal disposición se hace extensiva a tal caso. Esto teniendo en cuenta la finalidad de la figura de la caducidad, que en suma es “...atacar la acción por

⁴ Folios 54-57.



haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso [...],⁵, en aras de garantizar el principio de la seguridad jurídica bajo criterios de racionalidad y suficiencia temporal.

Por su parte, el artículo 169 del CPACA señala la consecuencia jurídica que se deriva de la caducidad: el rechazo de la demanda. La norma en comento preceptúa:

“Artículo 169. Rechazo de la demanda. Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad”.

- **Caso concreto:**

En el presente caso, el señor Darío Hernán Valencia Figueroa, a través de su apoderado judicial, solicitó se libre mandamiento de pago de la obligación económica contenida en el acto administrativo nro. 830 -DTH-004168 del 13 de septiembre de 2006. Sin embargo, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali negó el mandamiento de pago solicitado, por considerar que frente a la demanda había operado el fenómeno jurídico de la caducidad. Explicó el *a quo* que el título ejecutivo – Acto administrativo nro. 830- DTH-004168 – fue expedido el 13 de septiembre de 2006, sin que se presentara recurso alguno frente a éste y que la demanda ejecutiva fue radicada el 16 de octubre de 2015, fuera del término de los 5 años establecido en el artículo 164 numeral 2 literal k)

Inconforme con dicha decisión, el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que sostuvo que frente a la demanda de la referencia no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad, si en cuenta se tiene que el término establecido en el artículo 164 numeral 2 literal k) se suspendió durante el tiempo que EMCALI EICE ESP estuvo sometida al proceso de la toma de posesión de sus negocios, con fines liquidatorios.

En efecto, mediante Resolución nro. 002536 del 3 de abril de 2000⁶, la Superintendencia de Servicios Públicos ordenó la toma de posesión para administrar los negocios, bienes y haberes de EMCALI EICE ESP y a través de la Resolución nro. 00141 del 23 de enero de 2003, se dispuso “Modifícase la modalidad de la toma de posesión para administrar de EMCALI EICE ESP, por toma de posesión con fines liquidatorios y en consecuencia, a partir de la vigencia de la presente Resolución, se procederá a realizar los actos necesarios para iniciar el proceso liquidatorio”⁷. La aludida toma de posesión fue levantada a través de Resolución nro. SSPD-20131300018945 del 24 de junio de 2013⁸

Debe mencionarse que el artículo 121 de la Ley 142 de 1994 *“Por la cual se establece el régimen de servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”*, reguló lo atinente al procedimiento y alcances de la toma de posesión de las empresas de servicios públicos. En su inciso final, dispuso que “Se aplicarán, en estos casos, y en cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de instituciones financieras”. También, el Decreto 556 del 28 de marzo de 2000, a través del cual fue reglamentado el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, dispuso en su artículo 1 que “a la toma de posesión para la

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 24 de enero de 2007, cuyo demandante fue Néstor José Duarte Tolosa contra Corelca S.A. y otro, proferido dentro del proceso 20001-23-31-000-2005-02769-01(32958), con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio.

⁶ Folios 17-33.

⁷ Folios 35-39.

⁸ Folios 59-71.



administración de las empresas de servicios públicos domiciliarios se aplicarán, en cuanto sean pertinentes, las normas contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en las que lo desarrollen, relativas a la toma de posesión de instituciones financieras”.

El mencionado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se encuentra contenido en la Ley 550 de 1999⁹, que en su artículo 14 preceptúa lo siguiente:

“ARTICULO 14. EFECTOS DE LA INICIACION DE LA NEGOCIACION. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el artículo [27](#) de esta ley, no podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el empresario para alegar individual o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir su suspensión al juez competente, para lo cual bastará que aporten copia del certificado de la cámara de comercio en el que conste la inscripción del aviso. En los anteriores términos se adiciona el artículo [170](#) del Código de Procedimiento Civil; y el juez que fuere informado por el demandado de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en el presente inciso, incurrirá en causal de mala conducta.

Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario”. (Negrita y subrayas fuera del texto)

Conforme a lo anterior, es claro entonces que durante el lapso en el que EMCALI EICE ESP se vio inmersa en el proceso de toma de posesión con fines liquidatorios, el término de caducidad de las acciones ejecutivas se suspendió. Por tal razón, la juez de primera instancia, en el momento de verificar si la demanda fue interpuesta en término, debió tener en cuenta la aludida circunstancia. Además, es preciso señalar que, una vez efectuada dicha verificación, en caso de haberse configurado la caducidad, la decisión a tomar no era negar el mandamiento de pago sino rechazar de plano la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del CPACA.

Procede entonces la Sala a determinar si la demanda fue interpuesta en término, para lo cual tendrá en cuenta el lapso durante el cual se suspendió el fenómeno jurídico de caducidad, por encontrarse EMCALI EICE ESP en el proceso de toma de posesión con fines liquidatorios.

Se observa que en el expediente no obra la constancia de ejecutoria del acto administrativo en el que se sustenta la solicitud de mandamiento de pago. No obstante, se puede evidenciar que la demanda fue interpuesta dentro del término de los 5 años establecidos en la ley – 16 de octubre de 2015 ¹⁰- puesto que dicho acto tiene fecha del 13 de septiembre de 2006, es decir, fue expedido cuando EMCALI EICE ESP ya se encontraba en el proceso de toma de posesión con fines liquidatorios¹¹, el cual culminó el 24 de junio de 2013. Bajo ese entendido, el término de caducidad comenzó a correr a partir de la última fecha mencionada y, por tanto, el plazo para presentar la demanda

⁹ Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

¹⁰ Folio 50.

¹¹ El proceso de toma de posesión de EMCALI EICE ESP inició el 3 de abril de 2000, con la expedición de la Resolución nro. 002536.

RADICACIÓN : 2015-00364-01
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : DARIO HERNAN VALENCIA FIGUEROA
Ejecutado : EMCALI EICE ESP
Asunto : APELACIÓN DE AUTO



5

venció el 24 de junio de 2018. Luego, la demanda fue radicada oportunamente el 16 de octubre de 2015.

En ese orden de ideas, la decisión impugnada habrá de revocarse, para que, en su lugar, el juez de primera instancia proceda a efectuar el estudio pertinente respecto al cumplimiento de los requisitos de procedencia del mandamiento de pago.

En consecuencia, EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA-Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- REVOCAR el auto interlocutorio nro. 1062 del 29 de octubre de 2015, proferido por el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali, que dispuso negar el mandamiento de pago solicitado por Darío Hernán Valencia Figueroa contra EMCALI EICE ESP.

SEGUNDO: DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen para que proceda a efectuar el análisis de procedencia del mandamiento de pago pertinente, cancélese su radicación y sin costas en esta instancia¹².

Providencia discutida y aprobada en Sesión de la fecha. Acta No. **007**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MUÑOZ
Magistrado

¹² Proyecto: ACH
VoBo Secretario

RADICACIÓN : 2015-00364-01
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : DARIO HERNAN VALENCIA FIGUEROA
Ejecutado : EMCALI EICE ESP
Asunto : APELACIÓN DE AUTO



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado
Salvo voto

JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado
ACLARO VOTO.


SALVAMENTO DE VOTO

Al margen de las consideraciones expuestas en la providencia de segunda instancia, debo señalar que, estando claro que el título ejecutivo en el proceso *sub lite* radica en un acto administrativo, debo recordar que al tenor de lo previsto en el numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para adelantar éste tipo de procesos ejecutivos cuando el título radica en un acto administrativo.

Esta es la tesis sostenida por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla¹³, que sobre éste punto en particular ha señalado: *“Luego, otro tipo de actos administrativos, expedidos por la Administración, que no tengan origen en contratos celebrados por entidades públicas, como los enlistados en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 99 del C.P.A.C.A., no se ejecutarían ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sino ante la Justicia Ordinaria, en virtud de la cláusula general que se viene comentando”*.

Ahora bien, es importante precisar que si bien el numeral 4º del artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, contempló como título ejecutivo la copia auténtica de los actos administrativos debidamente ejecutoriados que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles, ello no significa que se haya asignado la competencia a la jurisdicción contenciosa administrativa de estos procesos ejecutivos. Esto por cuanto el artículo 297 *ibídem*, se limita a enunciar las clases de título ejecutivo, entre los que obviamente están los actos administrativos con las características precitadas, más sin embargo, esta norma en ninguna parte expresa o refiere que la jurisdicción contenciosa administrativa deba conocer de estos procesos ejecutivos, lo cual constituye un error de interpretación que no se acompasa con el genuino espíritu del legislador.

Atentamente,



RONALD OTTO CEDEÑO BLUME
Magistrado

¹³ Módulo procesos ejecutivos, Unidad 18, autor: Dr, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

RADICACIÓN : 2015-00364-01
Medio de control : EJECUTIVO
Ejecutante : DARIO HERNAN VALENCIA FIGUEROA
Ejecutado : EMCALI EICE ESP
Asunto : APELACIÓN DE AUTO



Si bien estoy de acuerdo con la decisión discrepo del argumento contenido en el auto, de que en el proceso ejecutivo haya rechazo de la demanda.

JHON ERICK CHAVES BRAVO.
Magistrado.